

Opinión política y post-guerra

Hasta el punto en que ha avanzado la humanidad en la teoría, hasta ese punto se ha *emancipado*; hasta el punto en que quiere *ser libre*, hasta ese punto *es libre*.

Durante la guerra salvadoreña, muchos argumentos y acciones de la lucha "revolucionaria" bastaban por sí mismos; no era preciso comprender realidades, porque ya eran conocidas; tampoco era preciso dar explicaciones ni hacer justificaciones, pues éstas habían sido dadas ya por los teóricos clásicos más connotados de la transformación revolucionaria.

Trece años después de las marchas más grandes por la unidad de "la clase oprimida" (proletaria y campesina); desde que los intelectuales laicos y religiosos, junto con los estratos más humildes de la sociedad recorrían las calles de la capital, arriesgándolo todo por el triunfo de la revolución, las cosas han cambiado mucho. Aquella incorporación masiva de la población a la lucha política es cosa del pasado.

Ahora, la evidencia empírica de los estudios de opinión pública señala que ésta se mueve en un sentido sustancialmente diferente. La coincidencia más significativa se da en torno a la opinión de que "no hay nadie que represente los intereses mayoritarios de la sociedad" y que la política no es algo importante en el "sentido común".

La mujer salvadoreña, al ser preguntada sobre "cuál es el pensamiento político que más le gusta" respondió, en noviembre de 1992, en un 57 por

ciento de los casos que "ninguno". El 28.1 por ciento que la derecha y el 9.3 por ciento que la izquierda.

Al preguntar a las mujeres sobre quién debe resolver los problemas que señalaron como más importantes, respondieron mayoritariamente (58.6 por ciento) que el gobierno; a la pregunta qué podría hacer usted para ayudar a resolver los problemas del país, la respuesta mayoritaria fue *nada* (25.2 por ciento) o *no sé* (20.5 por ciento). En tercer lugar estaban quienes dijeron *trabajar* y apenas un 6.6 por ciento afirmó que debía participar y, o votar.

En el sector rural, la pregunta fue, "¿considera usted que hay alguna institución, partido político, sindicato o grupo que represente sus intereses personales y familiares?". El 63.9 por ciento dijo *no* y el 21.6 por ciento dijo no saber; apenas un 4.6 por ciento dijo *sí*. El 23.1 por ciento dijo no considerar capaz a ningún partido para dirigir el país durante el próximo período, mientras que el 39.6 por ciento dijo que el voto era secreto, respuesta que generalmente se asocia con una tendencia al abstencionismo.

La clase obrera respondió a esta pregunta de la manera siguiente, el 29.7 por ciento afirmó no considerar a ningún partido político capaz para di-

rigir los destinos del país en el próximo período y el 19.3 por ciento afirmó que el voto es secreto; pero más alarmante es el hecho que de los entrevistados, el 77.7 por ciento dijo que ningún partido o institución les representa y un 10.6 por ciento dijo no saberlo.

En el sector empresarial, el 36.4 por ciento dijo que ninguno de los partidos está capacitado para dirigir el país, mientras que el 18.5 por ciento respondió que no sabía. Sin embargo, en este sector, la opción predominante es ARENA, el 38.9 por ciento.

La juventud también se mostró más anuente a la derecha (47.5 por ciento) y sólo un 31.2 por ciento afirmó no tener un referente de pensamiento político. En cuanto a preferencia partidaria, el 46.8 por ciento afirma que el voto es secreto o que no tiene un partido por el cual votar para presidente; el 47.4 por ciento no lo tiene para diputados. A fin de medir su disposición a participar en la vida política para resolver los problemas del país, el 17.9 por ciento afirmó que éstos no eran sus problemas o que no podían hacer nada; el 25.4 por ciento dijo no saber qué hacer. Según los jóvenes, la responsabilidad para resolverlos es del gobierno (60.1 por ciento) y apenas un 16.4 por ciento dijo que era de todos, del pueblo.

De lo que se trata más bien es de demostrar que después de la guerra la conciencia colectiva de la sociedad salvadoreña, en sus diferentes segmentos, ha quedado trastocada y delineada de tal manera que las condiciones subjetivas para la democracia y la participación ciudadana no están dadas aún, y nos apoyamos, como base para demostrarlo, en estudios de opinión pública². El tema se justifica por sí mismo, dado que si el pensamiento democrático no llega a ocupar todas las instancias de la vida del país, no se consolidarán las reformas socio-políticas que la negociación del conflicto armado ha propiciado.

Es un hecho que durante la guerra la adhesión de la opinión pública a los planteamientos de uno u otro bando fue decreciendo hasta llegar a una situación de incredulidad, desconfianza y temor, tal como lo muestran los estudios de opinión pública que hoy se han realizado. En la izquierda dominó la visión de la opinión pública como un asunto de

conducción de "masas"; mientras que el gobierno, debido a la enorme cantidad de recursos a su alcance, abordó la opinión pública como un asunto de "manejo de públicos".

Es crucial definir el límite y las diferencias entre el concepto de *masas* y el de *público*. Traemos a cuenta para ello los valiosos aportes de Gabriel Tarde, quien estudió *los públicos* como un fenómeno propio del desarrollo de los medios de comunicación colectiva, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como de los medios de transporte cada vez más perfeccionados.

La masa, plantea Tarde, precisa del contacto físico, ya que su activación se desencadena a nivel de la psique, sólo a partir de ese contacto físico. La masa es un grupo social cada vez más del pasado en las sociedades que van recibiendo y usando los influjos del desarrollo tecnológico mundial. Este planteamiento se puede contrastar con la realidad salvadoreña, en particular con las prácticas de la guerra, con la metodología empleada por las fuerzas insurgentes en su empeño para crear la base social de su proyecto y con las tácticas empleadas por el proyecto contrainsurgente para crear las propias.

El trabajo de organización y formación político-ideológica de la izquierda salvadoreña se ha desarrollado siempre sobre la base del contacto físico y directo con las comunidades, las fábricas, las oficinas públicas o privadas, etc. La forma de expresión más utilizada por la izquierda —al ser excluida de la posibilidad de acceder a los grandes medios de comunicación— fue la marcha, la manifestación callejera, las tomas, los llamados medios alternativos de comunicación, etc. Todas estas son formas muy peculiares de trabajo en las que se establece una identidad grupal intensa, una coincidencia de objetivos y consignas a través del contacto directo. Lo mismo sucedía en los frentes de guerra, las llamadas "masas", eran agrupamientos poblacionales que acompañaban físicamente a los combatientes. Eran una especie de comunidades nómadas que se desplazaban de un lugar a otro y cuyo calendario de peregrinación estaba determinado por la dinámica del combate, por los operativos, las ofensivas, las retiradas, etc.

El método de trabajo de masas es la base de una estrategia para la "toma de poder" por la vía



insurreccional, y ninguna insurrección puede ser realidad sin la integración decisiva de las masas. En ese sentido, la izquierda logró una presencia importante y un impacto poderoso en la política durante los años ochenta, sólo a través de la lucha de movilización de masas, en un esfuerzo sistemático, concentrado, unidireccional y organizado. Las líneas de trabajo de la comunicación siempre tuvieron como presupuesto básico el planteamiento de Lenin, quien en su época atribuía tres funciones a la prensa, el instrumento más desarrollado de comunicación colectiva en ese entonces: propaganda, agitación y organización colectiva³.

En cambio, la comunicación contrainsurgente se movía en otra dirección y abordaba la opinión pública desde otra perspectiva, no por la vía de un tratamiento de masas, sino como "públicos". Gabriel Tarde entiende los públicos como *"una colectividad puramente espiritual, como una diseminación de individuos físicamente separados y cuya cohesión es por completo mental"*⁴.

En términos de comunicación colectiva, las tácticas empleadas por la contrainsurgencia fueron amplias y variadas durante la guerra, pero lo más importante es que la llamada "guerra de baja intensidad" tenía como objetivo, en términos comunicativos, invalidar al "enemigo" (la izquierda política-militar del FDR-FMLN), atribuyéndole toda la responsabilidad de la guerra, del terror y de la

crisis económica, y paralizar a la población que pudiera ser atraída por ella.

El objetivo de la campaña multimillonaria a nivel de medios de comunicación desarrollada por el gobierno era convencer al amplio público que "la democracia naciente, estaba siendo impedida, obstaculizada, atacada, por los terroristas del FMLN-FDR, alentados por el comunismo internacional". Esa fue la glosa de todos los discursos de Napoleón Duarte e incluso de ARENA. En la segunda fase de la guerra contrainsurgente, que comienza a partir de 1984, el objetivo de la campaña no descansaba de manera exclusiva en la eliminación física del "enemigo" (masacres callejeras o en el campo, desaparecimientos, exhibición de cadáveres, etc.), sino más bien en el des- crédito de la causa revolucionaria y en la paralización política, por la vía del terror psíquico, de la población; se buscaba trazar una línea clara entre la "ciudadanía honrada" y los "terroristas".

Esta campaña comunicacional logró generalizar en la conciencia del público una connotación de guerra, de terror, de violencia, de muerte y de destrucción para la denotación "izquierda" en términos políticos, tal como lo demostró un estudio realizado durante las elecciones de 1991⁵. Sin embargo, lo específico del trabajo con los públicos se desarrolló por medio de iniciativas comunicacionales dirigidas de manera razonada, sistemática, planificada y orquestada a sectores poblacionales que se consideraba necesario prevenir, advertir o disuadir ante su posible aceptación de la causa del "enemigo" (FMLN-FDR). No era un trabajo de contacto físico directo, sino más bien la generación de un "sentimiento de pertenencia" o adhesión espiritual a un pensamiento común, en el cual el público al que se dirigía la estrategia comunicacional, debía concluir que habían oportunidades de libre expresión democrática, había elecciones libres, libertad de pensamiento, de expresión e información.

Pero si el desacuerdo de algún ciudadano iba más allá, es decir, en contra de ese "sistema democrático" que se había establecido después del his-

tórico golpe militar —que además era celebrado como fiesta nacional—, entonces, la persona se incluía en la categoría de desestabilizador, subversivo, totalitario, etc. Como el objetivo era generar en los diversos públicos un sentimiento de pertenencia al proyecto de democratización gubernamental, el asunto era que si no se estaba de acuerdo, el sentimiento era de no pertenencia y aislamiento social. Para el público que lograba leer más allá de los titulares de los periódicos, el sistema tenía un filtro más: la represión, que era ya más selectiva y no tan ruidosa como la de principios de la década.

Este público cada vez más reducido reaccionó entonces en dos sentidos: aislarse del resto de la gente a la que consideraba adaptada, ya fuera para colaborar subrepticamente con la insurgencia, lo cual reportaba los riesgos consabidos, u optar por la adaptación al sistema, en espera de tiempos mejores; pero en uno y otro caso, la relación espiritual con personas que fuesen parte de su misma línea de pensamiento o corriente de opinión, difícilmente podía ir más allá de la relación directa.

No sólo el Estado reprimió la libre expresión de aquellos sectores que pretendían excluir del espectro político. También la izquierda negó el derecho a disentir. El componente militar de sus organizaciones políticas en estado de guerra las llevó a dar y recibir órdenes sin preguntar, a ejecutar “*la línea*” y a desarrollar estrategias de lucha política, no desde las instituciones que todo Estado democrático y de derecho provee a la sociedad, sino desde “pseudopartidos”⁶.

Esos instrumentos no podían ser los mismos que establece una sociedad o un Estado en paz y democracia. Antes bien, la izquierda debió proveerse de un ejército revolucionario con sus diversos niveles de acción y frentes de masas, cuya función principal era “vetar” las iniciativas del gobierno, donde además el disenso era de hecho inexistente. Pero lo importante es reconocer y señalar que internamente, en las organizaciones de la izquierda, cualquier opinión contraria se mantenía en el umbral de lo prohibido y lo peligroso, y podía llevar a una exclusión o una “purga interna”.

Durante los últimos sesenta años de nuestra

historia y sobre todo durante la guerra, el derecho al disenso no fue reconocido por ninguno de sus protagonistas directos y las formas de abordar la disidencia fueron la confrontación y la imposición autoritaria. Como resultado tenemos ahora una sociedad que no está formada, educada ni preparada para abordar el problema del disenso, desde una perspectiva y una práctica democrática.

Por otra parte, existe otro fenómeno importante en cuanto a la generación y difusión de la opinión pública. En efecto, en la década de los ochenta, la opinión pública estuvo expuesta a dos conflictos, el estratégico (gobierno contra FMLN-FDR) y el táctico, el pretendido bipartidismo que se instauraría definitivamente con la derrota del FMLN-FDR. Este segundo conflicto se dio entre el partido Demócrata Cristiano y ARENA.

El primero terminaría con la derrota del gobierno o del FMLN, mientras que el segundo debía tener mayor trascendencia en el tiempo. Sin embargo, durante los once años de guerra se dio un “equilibrio catastrófico”, debido a la incapacidad de ambos polos fundamentales del conflicto para imponerse al uno sobre el otro. Ambos recurrieron a todo tipo de tácticas para posponer una solución negociada, mientras buscaban la creación de mejores condiciones en la correlación de fuerzas para terminar imponiendo sus términos de negociación (de todas formas iba a haber negociación).

Al mirar la historia más reciente, hay dos conclusiones claras: la guerra derrotó todas las esperanzas de gobernabilidad del régimen durante la década de los ochenta y de victoria insurreccional del FMLN, y en segundo lugar, nadie estaba preparado para una negociación como la que se dio finalmente.

Así, pues, como lo señalábamos anteriormente, por parte del gobierno, el objetivo fue siempre mantener un cauce de opinión favorable al llamado “proceso democrático”, mientras que por el lado de la izquierda, el objetivo fue mantener la moral de lucha en las masas para generar las condiciones insurreccionales que llevaran a la toma del poder. Ambas estrategias comunicacionales tenían un componente común: vetaban reiterada y sistemáti-

camente a su oponente y ambos oponentes, uno más que otro, terminaron anulándose. Esta verdad sabida es la antesala del actual estado de la opinión pública respecto al tema socio-político.

Para colmo, después de doce años de guerra, la opinión pública terminó por no creer en nada ni en nadie. La izquierda, a pesar de su capacidad para resistir una fuerte reacción contrainsurgente, sufrió una profunda erosión en su imagen. Pudo continuar hasta terminar la guerra, debido a que la reserva moral de sus masas era unidireccional y cualitativamente equiparable a la cantidad de recursos con que contó el gobierno; pero una vez terminado el conflicto —y terminado no con un triunfo militar—, la moral de “sus masas” se ha visto minada y la reconfiguración de un proyecto que satisfaga las expectativas de esas masas se le plantea a la izquierda como su desafío más serio.

Por otra parte, el conflicto en la esfera de la política parlamentaria se desarrolló con otra dinámica: una letal pugna ideológica entre ARENA y el Partido Demócrata Cristiano, que terminó desgastándolos a ambos de cara a la opinión pública, convirtiendo el debate político en una práctica alejada de los problemas fundamentales de la población. En las difíciles circunstancias que la guerra impuso a la población, ésta no tuvo más opción que mimetizarse, convivir con ellos, sin creer en ellos.

Para estructurar una propuesta política que pretenda la auténtica democratización de la vida nacional, es preciso tomar en cuenta la opinión pública de los salvadoreños. Sobre esta base se deben diseminar las nuevas formas de conciencia colectiva, acordes con la demanda y la necesidad histórica de crear y consolidar espacios de participación ciudadana en el ejercicio del poder político.

La democracia que en la post-guerra se pretende construir, debe descansar sobre la base del consenso, del acuerdo y del diálogo entre los diferentes sectores, en la búsqueda de acuerdos que permitan la gobernabilidad del país, independientemente de la fuerza política que capture los distintos órganos del Estado. Lo anterior ha sido reiterado por los sectores más comprometidos con la transfirmación democrática del país. Sin embargo, la estructuración del consenso presupone la decisiva

participación política del país, por medio de instrumentos verdaderamente representativos y diversos, sean sociales, políticos o institucionales. A su vez, ese consenso presupone que los diferentes sectores sociales, políticos y económicos deben, previamente, “poner las cartas sobre la mesa” para que se conozcan sus planteamientos. Además, esos planteamientos deben ser realistas, coherentes y deben expresar en realidad lo que cada sector demanda para un nuevo período.

Y este es el problema, la sociedad salvadoreña no conoce la práctica del consenso, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni nadie. Esta es simplemente una práctica inexistente en nuestra historia más reciente. Entonces, *crear la cultura del consenso implica al menos dos requisitos, en primer lugar, generar las condiciones para que los disensos se expresen libremente sin temor⁷, y segundo, que en la solución de las diversas problemáticas de la nación participen activamente los diversos sectores.*

La opinión pública salvadoreña no conoce el disenso desde la perspectiva democrática; tampoco conoce la práctica del consenso, pues el método de la imposición autoritaria ha sido el más empleado, tanto en el interior de los partidos tradicionales, como en el gobierno mismo. Esto ha generado una ausencia en la convocatoria para la participación política y estamos ante un grave fenómeno de incredulidad, desprestigio y falta de liderazgo ante la opinión pública por parte de la sociedad política tradicional. Es un momento de crisis para la política. La opinión pública no la percibe como algo útil, necesario o práctico, pues ha perdido su componente de *civilidad o civismo*.

Si partimos del hecho que la comunicación, para ser efectiva, requiere de la credibilidad de quien comunica, podemos afirmar sin ambages que hay una crisis también de interlocutores válidos para la opinión pública. Esta no responde a ninguna voz de mando, porque las voces de mando que ya conoce están desacreditadas para ser obedecidas. Entramos, entonces, a la dimensión del poder mismo, pues si las órdenes son dadas y las decisiones tomadas, pero no son asumidas ni cumplidas por nadie, el poder, simplemente, no opera.

El objetivo final debiera ser proveer a la comunicación de un contenido innovador que revalide la política desde una concepción y una práctica de poder democráticas, para buscar y acceder a una nueva opinión pública, más apegada a las necesidades históricas de la nación, aun cuando "el sentido común" en un primer momento no le confiera importancia o no perciba esa necesidad.

En tal sentido se pueden definir dos retos a nivel de la opinión pública. El primero es de plazo inmediato y el segundo de largo plazo. Pero antes de abordarlos es preciso delimitar y señalar dos componentes del fenómeno de despolitización: el temor a expresarse y a participar, y la desconfianza de que expresarse y participar sirva para algo. El temor se va superando a medida que nos alejamos de la guerra temporalmente, pero la desconfianza va predominando cada vez con mayor fuerza.

Si no existe credibilidad en la opinión pública respecto a la política y a los políticos, es porque los procedimientos propios de las sociedades democráticas para interpretar y defender los intereses de los distintos sectores o grupos sociales no han funcionado, quedando éstos al margen de la toma de las decisiones estratégicas que les competen. Tampoco ha existido igualdad de condiciones en la competencia por el poder. Los más poderosos han tenido el control del aparato público y privado necesario para la renovación del poder y lejos de abrir las puertas para la participación de más sectores, las han estrechado.

La democracia implica de suyo lo contrario. Es un hecho que son las condiciones objetivas las que van ofreciendo las percepciones que la opinión pública necesita para optar o definir una posición respecto a lo político. El cambio de la opinión pública, al darse transformaciones en el ámbito de lo jurídico, no es automático ni inmediato. Podrían decretarse nuevas leyes para garantizar un mejor funcionamiento del aparato estatal, pero eso no implica que de manera inmediata y automática la gente va a creer en ese aparato. Para la opinión pública es fundamental la percepción de realidades aun cuando esas realidades puedan ser creadas de manera premeditada.

En tal sentido, el papel que estamos llamados a jugar como intelectuales de un nuevo proyecto democratizador es del de crear hechos que denoten una clara e inconfundible marcha hacia la democratización, hacia una devolución del verdadero rol de la sociedad en la determinación de su propio destino. Esto, que se convierte en el desafío a corto plazo, implica sendas campañas de educación cívica, incisivos llamados al voto y la participación electoral, redefiniciones a nivel de derecho en favor de la libertad de expresión y condiciones más óptimas para la limpieza electoral y lo más importante, abrir los espacios políticos para nuevos elementos de la sociedad civil, para que sus miembros participen en la política, cediéndoles espacios reales de participación e importantes cuotas de poder.

Esto último podrá ser concretado desde muchos mecanismos, pero lo fundamental es acercar la sociedad política a la civilidad y la civilidad a la política. Esto ya no es algo que "puede" suceder, si no más bien algo que "debe" suceder, pues quien tenga la capacidad de hacerlo, y hacerlo bien, será el triunfador en el próximo evento electoral; pero más importante aún es que quien logre trabajar en esta dirección y capture los dos órganos del Estado en contienda, así como los gobiernos municipales verá incrementadas las posibilidades de gobernabilidad.

El reto a largo plazo es la incorporación de nuevos contenidos en la educación formal, la redefinición de contenidos en el esfuerzo comunicacional masivo y, finalmente, la destrucción de todos los obstáculos que impiden la participación consciente de la población salvadoreña. Lograr la participación consciente en política del pueblo salvadoreño y no la alienada participación que pretende vender a los partidos y candidatos como un producto más para el hogar, es algo urgente y es una misión, no de la derecha ni de la izquierda ni de sus distintos matices en la escala de las extremas y los centros. Este es un reto para los nuevos políticos, para los nuevos partidos y para los nuevos salvadoreños.

Francisco Figueroa

Notas

1. Todos los datos que se presentan a continuación han sido tomados de estudios de opinión pública, realizados durante los meses de octubre a diciembre de 1992, en cinco investigaciones realizadas por CENID-CENSALE, sobre los segmentos jóvenes, mujeres, empresarios, campesinos y obreros.
2. CENID-CENSALE (1992-1993).
3. De un artículo publicado por Lenin en 1901, en el cuarto número de *Iskra*, titulado "Por dónde empezar".
4. En el primer capítulo de su libro *L'Opinion et la foule*, Gabriel Tarde plantea que "de la masa al público la distancia es inmensa, como ya se ha visto, si bien el público procede en parte de una especie de masa: el auditorio de los oradores". Masa y público se diferencian cuando menos en tres aspectos y en las múltiples facetas que a cada uno de ellos afectan: *la pertenencia, la motivación y la libertad*.
5. Encuesta CENID-CENSALE (1991-1992).
6. Las organizaciones populares eran las sustitutas del partido político, pero no podían tener los mismos atributos, no podían competir para la toma del poder, ni deseaban hacerlo por los mecanismos del llamado "proceso democrático".
7. Aún existe entre la población salvadoreña un nivel de temor a expresar su opinión acerca de temas políticos. La frase "yo no me meto en política" no sólo expresa una opinión de desconfianza frente a los políticos, tal como lo hemos venido planteando, sino también el temor a la enemistad, al despido, etc.

